



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 7 de Marzo de 2023

Vistos los autos: "Akapol S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", de los que

Resulta:

I) A fs. 133/156 vta. se presenta Akapol S.A. y promueve demanda en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 179, inciso 23 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba (t.o. decreto local 270/2004; artículo 1°, inciso 16 y artículo 1°, inciso 11, leyes provinciales 9201 y 9442, respectivamente), así como del artículo 5° de la ley local 9505, de los artículos 21 de las leyes impositivas provinciales 9577, 9704, 9875 y 10.013, y del artículo 22 de la ley impositiva 10.118 y, en consecuencia, ilegítima la pretensión de la demandada -plasmada en la intimación cursada en el marco del expediente 0562-000742/2013- de aplicarle alícuotas diferenciales más gravosas en el impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad que realiza en dicha jurisdicción, en razón de no poseer su establecimiento productivo en esa provincia.

Explica que es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos adhesivos y envases de aluminio de alta calidad. Manifiesta que elabora tales bienes en una planta industrial ubicada en Pilar, Provincia de Buenos Aires y aclara que, hasta finales de 2008, parte de su

producción tuvo lugar en la Provincia de San Luis. Refiere que vende su producción en todo el país y que, por esa razón, tributa el impuesto sobre los ingresos brutos de acuerdo con el régimen del Convenio Multilateral.

Manifiesta que el 13 de agosto de 2013 fue notificada de la resolución dictada en el marco del expediente administrativo n° 0562-000742/2013, por medio de la cual la Policía Fiscal de la provincia demandada determinó la existencia de una deuda en concepto de ingresos brutos calculada con fundamento en las normas impugnadas y en atención a que su establecimiento industrial no se encontraba en esa jurisdicción territorial.

Sostiene que esa pretensión fiscal representa una aduana interior que vulnera lo prescripto por los artículos 9°, 10 y 11 de la Constitución Nacional y, asimismo, que constituye una irrupción a las facultades exclusivas de la Nación para reglar el comercio establecidas en los artículos 75, inciso 13, y 126 de la Carta Magna.

Por último, desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia formal de la acción declarativa.

II) A fs. 159/160 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 161/161 vta. el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa.



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

III) A fs. 188/245 la Provincia de Córdoba contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, reproduce el texto de las normas impugnadas y destaca —entre otras consideraciones— que el objetivo de la medida fiscal en cuestión debe entenderse como una política enmarcada en la potestad de promover la industria local y estimular su desarrollo, reservada para sí a través del artículo 125 de la Constitución Nacional, y que la provincia grava con alícuotas diferenciales el desarrollo de actividades distintas dentro de su ámbito jurisdiccional.

IV) A fs. 408 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”.

### Considerando:

1º) Que esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta, sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la normativa impugnada a través de la demanda (artículos 179, inciso 23, del Código

Tributario de la Provincia de Córdoba -t.o. decreto local 270/2004; 1°, inciso 16 y 1°, inciso 11, de las leyes 9201 y 9442, respectivamente-, 5° de la ley 9505, así como de los artículos 21 de las leyes impositivas 9577, 9704, 9875, 10.013 y del artículo 22 de la ley 10.118), a la par de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:451; 318:30; 323:1206; 327:1034 y 340:1338).

En ese sentido, en el presente caso se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, de la prueba documental agregada a la causa se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de la relación jurídica tributaria, por lo que la controversia es actual y concreta (conf. Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

En consecuencia, es dable concluir que se encuentran reunidos los presupuestos exigidos por el artículo 322 del código del ordenamiento procesal para la procedencia formal de la acción declarativa promovida.

Dicha situación también comprende los períodos alcanzados por la ley local 10.118, en razón de lo que surge de



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

las constancias incorporadas a fs. 132 y de los términos de la contestación de la demanda.

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, en efecto, de acuerdo a la doctrina que surge de los precedentes citados en el considerando anterior, la aplicación en el caso de la normativa impugnada -reseñada en el considerando 2°-, al gravar a la parte actora la actividad industrial ya referida con alícuotas superiores, por no desarrollarla en establecimientos ubicados en la Provincia de Córdoba, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias, por cuanto queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo, se lesiona el principio de igualdad, y se altera la corriente natural del comercio, instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12, 16, 75, inciso 13, y 126 de la Constitución Nacional), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su

territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Akapol S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 179, inciso 23, del Código Tributario de la Provincia de Córdoba (t.o. decreto local 270/2004; artículo 1º, inciso 16 y artículo 1º, inciso 11, leyes provinciales 9201 y 9442, respectivamente), así como del artículo 5º de la ley local 9505, de los artículos 21 de las leyes impositivas provinciales 9577, 9704, 9875 y 10.013, y del artículo 22 de la ley impositiva 10.118, de la Provincia de Córdoba y de la pretensión fiscal plasmada en el expediente n° 0562-000742/2013. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Parte actora: **Akapol S.A.**, representada por su letrado apoderado, **Dr. Mariano Guaita**, patrocinado por los **Dres. Pablo Esteban Perrino y Juan Carlos Cassagne**.

Parte demandada: **Provincia de Córdoba, Dres. Jorge Eduardo Córdoba y Pablo Juan María Reyna**.

Ministerio Público: **Dra. Laura M. Monti**.